

Según Devoto, *“la explicación de la conflictividad argentina no está sólo en que la misma fuese un signo de modernidad social que pueda ponerse en paralelo con los prósperos ‘veinticinco años gloriosos’ de la posguerra en el contexto occidental. La exasperación de la misma era, en la Argentina, también resultado de la progresiva escisión entre expectativas y realidades, entre la conciencia de la ciudadanía social y los límites e imposibilidades de alcanzarla efectivamente”*.

En tal sentido, analice y explique los alcances y límites del llamado Estado de Bienestar argentino durante el peronismo clásico y en el período 1955-1966. **Ejemplifique con al menos 2 (dos) de las fuentes** documentales seleccionadas.

En el año 1946 comenzó, según Andrenacci, un período de la historia argentina que revolucionó la forma en la que se piensa y construye la política: el peronismo clásico. Esta etapa simbolizó un gran avance en derechos sociales y propuso un nuevo modelo económico que se basaba en una distribución más justa del ingreso nacional; extendiéndose hasta el año 1955, momento en el que comenzó la dictadura militar popularmente conocida como la Revolución Libertadora. Este gobierno de facto (presidido primero por Eduardo Lonardi y luego por Pedro Eugenio Aramburu) ocupó el poder hasta 1958, cuando asumió la presidencia, por medio de unas elecciones que no fueron del todo democráticas, Arturo Frondizi; luego derrocado por otra dictadura encabezada por José María Guido en 1962, que concluyó un año después con la elección de Arturo Illia como presidente, luego desplazado por otra dictadura militar.

En el siguiente ensayo analizaré esta etapa haciendo énfasis en sus principales diferencias entre las gestiones de los gobiernos que la comprendieron, sobre todo en el plano de las políticas públicas y la gestión económica; examinando los alcances y los límites de la aplicación del modelo económico conocido como Estado de Bienestar en la Argentina, su surgimiento, desarrollo y finalmente, disolución.

Antes de comenzar a desarrollar un relato cronológico de este período comprendido entre los años 1946 y 1966 me gustaría primero proponer una definición del concepto de *Estado de Bienestar*. Según Andrenacci, el Estado de Bienestar (también conocido como Estado Social o Estado Protector) es “una configuración de política pública por el tipo de integración de funciones socioeconómicas con la división social del trabajo, opción que otorga carácter de Estado Social a la casi totalidad de los Estados capitalistas del siglo XX, y establece el interés por la comprensión de las modalidades organizativas” (2002). En Argentina, este modelo económico se caracterizó principalmente por el rol del Estado como intermediario de las relaciones entre capital y trabajo y la expansión del sector público.

En el año 1943, un golpe de Estado desplazó al gobierno democráticamente electo de Ramón Castillo, comenzando así un período que Torre define como “un nuevo ciclo político destinado a producir transformaciones de amplio y duradero impacto en los equilibrios políticos y sociales del país” (2002). Este gobierno de facto asumió el poder el 4 de junio para luego ser derrocado en octubre por un sector dentro de este mismo gobierno: la logia autodenominada Grupo de Oficiales Unidos (GOU). Los meses siguientes a la toma de la presidencia por parte del GOU se caracterizaron por una constante puja dentro de esta logia, dentro de la cual se daría a conocer una nueva figura en la política argentina: la del coronel Juan Domingo Perón.

Para mitad de 1944, Perón ya ocupaba el rol de vicepresidente de la nación; aunque su trabajo más notorio consistió en una serie de políticas implementadas desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Por primera vez, el Estado argentino empieza a tener un rol protagónico en la vida de las empresas, interviniendo en estas a favor de los trabajadores. Sin perder una visión conciliadora entre los obreros y los empresarios, la sindicalización fue alentada y empezaron a garantizarse derechos laborales antes inexistentes. Pronunció Perón en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en agosto de 1944: “estimo que el futuro será cada vez mejor por los beneficios incalculables que la organización gremial va a dar al país para su orden interno, para su progreso y para su bienestar general”.

Habiendo ya ganado una increíble popularidad en el sector de los trabajadores, Perón fue entonces electo como presidente de la Argentina en febrero de 1946, asumiendo el cargo en junio de este mismo año. En líneas generales, su primera presidencia simbolizó un momento de consolidación y desarrollo de las políticas sociales impulsadas en el gobierno anterior desde la Secretaría de Trabajo y Previsión; delimitándose en este momento la orientación económica del peronismo, caracterizada por una “fuerte tutela jurídica del contrato de trabajo, junto con un sistema abarcativo (aunque fragmentado) de seguros sociales; la extensión cualitativa y cuantitativa del sistema educativo público, junto con una red desintegrada y laxa pero efectiva de grandes instituciones sanitarias públicas; y una asistencia social semiestatizada y politizada con nuevos tipos de transferencias distributivas, tales como las asignaciones familiares y la política de vivienda social” (Andrenacci, 2002). Según este mismo autor, las relaciones entre el Estado y los sectores asalariados argentinos, afianzadas en el gobierno peronista, constituyeron el cambio que produciría más efectos a largo plazo en nuestra historia.

Por otro lado, Torre caracteriza a esta política económica como una distribucionista y nacionalista. La expansión del gasto público y el rol activo del Estado en la producción (con vistas al incentivo del mercado interno) y en los servicios públicos (mediante una serie de nacionalizaciones) comenzaron a dar su fruto en la mitad de la primera presidencia de Perón (en los años 1947 y 1948), resultando en una distribución más equitativa del ingreso y una mayor movilidad social general; pero por sobre todo, la integración (por primera vez en la historia argentina) de la clase trabajadora en la política y en la definición y ejecución de un modelo económico nacional. Fue en este momento en que Perón propone el primer plan quinquenal, que constó en una serie de medidas económicas que tenían el objetivo de estimular distintos circuitos de la economía nacional, mediante un régimen de incentivos y una creciente industrialización para sustituir distintos bienes previamente importados por

otros producidos en territorio nacional. A pesar de haber sido planteado con una duración de cinco años, este solo fue sostenido desde el gobierno por tres.

También en este período se concreta la materialización legal de todos los avances en materia de derechos de los trabajadores logrados en los años anteriores y algunos nuevos, como el aguinaldo anual o la generalización de las vacaciones pagas. En el año 1949, se aprobó una reforma constitucional que le otorgaba carácter constitucional a todos estos derechos sociales. Según Basualdo, este proceso logró la constitución de la clase trabajadora como sujeto social de trascendencia, por medio de la concreción de “las reivindicaciones (convenios colectivos por actividad, tribunales laborales, salarios mínimos, seguridad social, aguinaldo, etc.) que habían formulado los sectores populares en las décadas anteriores, a través de sus representaciones sociales y políticas (...) Muchas ya estaban establecidas legalmente pero no se cumplían, mientras que otras dieron lugar a una profusa legislación que las puso en marcha” (2010).

Otro cambio importante introducido por la reforma constitucional de 1949 fue la supresión de la cláusula que prohibía la reelección presidencial inmediata, siendo este el más importante (pero no el único) cambio en cuanto a legislación electoral en la Constitución. De esta manera empezaba el camino de Perón a su reelección en 1952.

La segunda presidencia de Perón se diferenció de la primera, en el plano económico, por varios motivos. La estrategia planteada a partir de 1952 ya no estaba enfocada en la expansión económica, ya que no se podía mantener el nivel de crecimiento que caracterizaron a los primeros años peronistas; y por este mismo motivo se priorizó a la estabilidad (es decir, el poder sostener en el tiempo lo logrado en los años previos) por sobre la expansión. Otras grandes diferencias entre ambos períodos presidenciales fueron, según Torre, que, en la segunda, el protagonismo pasó del sector industrial a la agricultura; y se incentivó la iniciativa privada y el capital extranjero por encima del crecimiento del sector público; plasmandose este nuevo enfoque en el segundo plan quinquenal.

A pesar de la planificación del gobierno de Perón, Argentina atravesó un período de crisis económica al momento del comienzo del segundo gobierno peronista. Luego de varios años de crecimiento, inicia un período de austeridad, marcado por la inflación y el estancamiento de los salarios. Con el propósito de bajar el consumo, el gobierno recurrió a medidas características de la teoría económica ortodoxa: se establecieron una serie de restricciones fiscales y monetarias y se congelaron los salarios por dos años, decretando una suspensión de las negociaciones entre empresarios y sindicatos. Se genera así un gran contraste entre este paquete de medidas, que tiende al ajuste, y el que caracterizó al período anterior, que

incentivó un crecimiento económico de gran escala. Gracias a esta serie de políticas económicas, la economía argentina retomó el camino del crecimiento en los años 1953 y 1954, y las pérdidas económicas de la clase trabajadora pudieron ser compensadas: la reanudación de las negociaciones colectivas permitieron recuperar los salarios perdidos en los años previos.

A pesar de la recuperación de la economía, otros conflictos empezaron a surgir dentro del ámbito político de nuestro país: el peronismo perdió el apoyo de algunos sectores que habían contribuido al ascenso de Perón a la presidencia; creándose un terreno fértil para las conspiraciones antidemocráticas. Finalmente, el 16 de septiembre del año 1955, la segunda presidencia de Perón llegó a su fin: la Revolución Libertadora, encabezada por Eduardo Lonardi (que luego de un par de meses fue reemplazado por Pedro Eugenio Aramburu), derrocó su gobierno instaurando en su lugar una dictadura militar; siendo el principal objetivo de este levantamiento militar lograr la *desperonización* del país, y el método para lograr este propósito el retroceso en materia de derechos sociales. Los lineamientos generales de las presidencias de Lonardi y Aramburu consistieron fundamentalmente en la modificación del sistema de acumulación nacional (modificación que implicaba la anulación de todas las conquistas sociales y económicas que la clase trabajadora logró durante el peronismo); y en el intento de la erradicación completa del peronismo del sistema político argentino. Según Schneider, dentro de este gobierno el debate giró en torno a dos problemas diferenciados: por un lado se discutió cuál sería la orientación económica que iba a adoptar el país a partir de este momento; y por el otro se trató de llegar a un acuerdo sobre qué se iba a hacer respecto al peronismo y todos los cambios impulsados por este.

Luego de que la conspiración castrense se consagrara en el poder, el peronismo fue proscripto y los partidos que lo representaban fueron disueltos por medio de un decreto presidencial (DECRETO LEY 3855 – Buenos Aires, 24 de noviembre de 1955), y de forma inmediata comenzó el proceso de retroceso en materia de derechos sociales, contrastando con el constante avance en éstos de los años previos. En palabras de Cavarozzi, “la insurrección no sólo produjo el derrocamiento de Perón: asimismo tuvo éxito en dismantelar el modelo político prevaleciente durante los diez años anteriores” (1992).

En este período, la clase obrera fue paulatinamente perdiendo el espacio que había conquistado dentro del esquema político nacional, mientras que el sector empresarial gozó de un lugar privilegiado dentro del gobierno de facto, pudiendo utilizar distintas herramientas del Estado a su favor. De esta manera se instauró un discurso que responsabilizaba al modelo económico peronista de todos los problemas de la coyuntura del momento, invocando

también acusaciones de corrupción y una condena a políticas que tildaban de poco efectivas. En noviembre de 1955, el gobierno de facto decide intervenir a la CGT, y se manifiesta en el Boletín Oficial todo lo anteriormente mencionado: “Que con olvido de su elevada y específica función de defensora de los trabajadores, la Confederación General del Trabajo permitió que durante la tiranía se desquiciase totalmente la economía argentina con una intensidad tal como para hacer temer que la miseria se cierna sobre el pueblo y que la desocupación afecte a las masas laboriosas, grave amenaza esta, que el Gobierno de la Revolución se esforzará denodadamente por conjurar” (Decreto-Ley N° 3032, Buenos Aires, 16/11/55).

Según Schneider, a pesar de que la Revolución Libertadora intentó emprender una vuelta atrás y trató de que ciertos sectores recuperen el poder que en parte habían perdido durante los años peronistas, a esta altura “la coyuntura histórica demostró que un regreso al modelo agro-exportador era imposible así como también era poco viable erradicar la concepción de ciudadanía social que había establecido la práctica peronista”. La resistencia peronista al golpe militar no tardó en tomar fuerza: ni bien se dio comienzo al gobierno de facto, los trabajadores “se atrincheraron para defender sus conquistas, sus formas de organización y el lugar que habían ganado en la sociedad” (2006).

Las diversas protestas obreras fueron una constante durante el gobierno de facto, llegando en 1957 a un punto de inflexión. Las medidas de fuerza sostenidas por los trabajadores desembocaron en que se acuerde una salida institucional a estos conflictos y se convocó a elecciones nacionales (elecciones que habían sido anunciadas algunos meses antes del aumento de las protestas pero que fueron aceleradas por la incidencia de este conflicto). En febrero de 1958, Arturo Frondizi, candidato de la Unión Cívica Radical Intransigente, fue elegido como el nuevo presidente de la Argentina. Debido a que el partido peronista seguía estando proscripto, los candidatos de este no pudieron presentarse a las elecciones; resultando esto en un gran porcentaje de ciudadanos que prefirieron votar en blanco y en un débil apoyo al candidato ganador, que no obtuvo uno tan consolidado como el de los gobiernos peronistas.

Ya desde su asunción, Frondizi estableció una serie de cambios que modificaron lentamente el modelo de acumulación de capital. Durante su gestión se implementó un programa conocido como desarrollismo, que defendía un desarrollo económico nacional acelerado, por medio de una transformación técnica, con el objetivo de lograr una mayor independencia del país. Se retoman así las negociaciones entre empresarios y trabajadores mediadas por el Estado, desde la perspectiva de que las distintas instituciones y clases sociales debían dejar de

lado sus conflictos y trabajar en conjunto por el bien común de la Nación. A pesar de que esta perspectiva conciliadora de clases parece similar a la de Perón, la principal diferencia entre ambas gestiones fue que la de Frondizi sostuvo que “el modelo de conciliación de clases del período 1945-1955 tenía, al menos en el corto plazo, una contradicción ineludible; la misma sólo podía ser resuelta disminuyendo el salario real de los trabajadores para aumentar la renta de los industriales; tal aumento era, a su vez, considerado un requisito indispensable para una elevación significativa del nivel de inversión” (Cavarozzi, 1992). Es decir, el incentivo estatal para la resolución de los conflictos de clase mediante la discusión entre los sectores trabajadores y empresarios no significó una defensa de los derechos del primer grupo, en contraste con la experiencia peronista de los años anteriores.

En 1962, el gobierno de Frondizi fue derrocado por un nuevo golpe de Estado, esta vez encabezado por José María Guido, quien representó una visión económica aún más conservadora que la del presidente anterior; anulando automáticamente los pocos avances que se habían conseguido en la presidencia de Frondizi. De todas maneras, esta gestión duró menos de dos años: en octubre de 1963 Arturo Illia es electo como el nuevo presidente de nuestro país.

La gestión de Illia se caracterizó por retomar el camino del intervencionismo estatal, ganándose así cada vez más opositores dentro de poderosos sectores económicos, situación que dificultó que estas medidas pudieran sostenerse en el tiempo. Esto terminó generando un clima político extremadamente inestable, en el que la presidencia de Illia ya no contaba con un apoyo generalizado de los ciudadanos y de los distintos agentes económicos. El descontento social fue aumentando hasta que se llegó a lo que yo creo un punto de no retorno. Finalmente, luego de varios años de integración social impulsado por un modelo económico de Estado de Bienestar, este pareció llegar a su fin. Este proceso de disolución del Estado de Bienestar llegó a su punto cúlmine cuando, en junio de 1966, el gobierno Illia fue desplazado por un nuevo golpe militar, encabezado esta vez por Juan Carlos Onganía.

Bibliografía

Andrenacci, L. y otros: “Acerca del estado de bienestar del peronismo clásico” en AA.VV. *En el país del no me acuerdo. (Des) memoria institucional e historia de política social en la Argentina*, Prometo, Buenos Aires, 2004.

Basualdo, Daniel: *Estudios de historia económica argentina*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2010.

Cavarozzi, Marcelo: *Autoritarismo y democracia*, CEAL, Buenos Aires, 1992.

Schneider, Alejandro: *Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo (1955-1973)*, Ediciones Imago Mundi, Buenos Aires, 2006.

Torre, Juan Carlos: “Introducción a los años peronistas” en Torre, J. C. (dir.), *Los años peronistas (1943-1955)*, Nueva Historia Argentina, Tomo VIII, Sudamericana, Buenos Aires, 2002.